



# Asamblea General

Distr. general  
24 de octubre de 2014  
Español  
Original: inglés

## Consejo de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal

21º período de sesiones

19 a 30 de enero de 2015

### **Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 c) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos y al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo**

#### **Granada\***

El presente informe constituye un resumen de cinco comunicaciones<sup>1</sup> de partes interesadas para el examen periódico universal. El informe sigue las directrices generales aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos en su decisión 17/119. No contiene opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o pronunciamiento alguno sobre afirmaciones concretas. La información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas y, en la medida de lo posible, los textos originales no se han modificado. De conformidad con la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, cuando procede se incluye una sección separada para las contribuciones de la institución nacional de derechos humanos del Estado examinado acreditada en plena conformidad con los Principios de París. Los textos completos de todas las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. El informe se ha preparado teniendo en cuenta la periodicidad del examen y los acontecimientos ocurridos durante ese período.

\* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.



## Información proporcionada por las partes interesadas

### A. Antecedentes y marco

#### 1. Alcance de las obligaciones internacionales<sup>2</sup>

1. Amnistía Internacional (AI) celebró las medidas adoptadas por Granada con miras a la ratificación de un conjunto de instrumentos fundamentales de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Indicó que, si bien reconocía que el país no tenía la capacidad para ratificar todos los tratados recomendados durante el examen, Granada se había comprometido a considerar la posibilidad de ratificar varios instrumentos internacionales de derechos humanos durante su primer Examen Periódico Universal (EPU) en 2010<sup>3 4</sup>.

2. La comunicación conjunta 2 (JS2), Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI) y AI recomendaron que Granada ratificara el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte<sup>5</sup>. La JS2 también recomendó que Granada ratificara el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte<sup>6</sup>.

3. AI instó a Granada a que firmara, ratificara y aplicara los tratados internacionales de derechos humanos más importantes, incluida la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con apoyo técnico y financiero del sistema de las Naciones Unidas y del sistema interamericano, si fuera necesario<sup>7</sup>.

4. AI también instó a Granada a que ratificara y aplicara la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con apoyo técnico y financiero del sistema de las Naciones Unidas y del sistema interamericano, si fuera necesario<sup>8</sup>.

5. Además, AI instó a Granada a que firmara, ratificara y aplicara la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, con apoyo técnico y financiero del sistema de las Naciones Unidas y del sistema interamericano, si fuera necesario<sup>9</sup>.

#### 2. Marco constitucional y legislativo

6. La JS1 indicó que Granada había iniciado un proceso de reforma constitucional en 2013. Recomendó que el país ofreciera protección constitucional contra la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad o expresión de género; y que ajustara la legislación nacional a las convenciones internacionales y les diera precedencia sobre la legislación nacional<sup>10</sup>.

7. AI también exhortó a Granada a que incluyera en la legislación nacional, y en particular como parte del examen en curso de la Constitución, la cuestión de la orientación sexual y la identidad de género como la base para la protección de la discriminación, y que estableciera y aplicara políticas e iniciativas para abordar la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género<sup>11</sup>.

8. AI instó a Granada a que aprobara las disposiciones constitucionales apropiadas para abolir la pena de muerte, como parte del examen en curso de la Constitución<sup>12</sup>.

## **B. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos**

### **1. Cooperación con los órganos de tratados**

9. La CHRI recomendó que Granada demostrara su compromiso con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas cumpliendo con las obligaciones de presentación de informes que le incumbían en virtud de tratados<sup>13</sup>.

### **2. Cooperación con los procedimientos especiales**

10. La CHRI recomendó que Granada extendiera una invitación abierta a todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas<sup>14</sup>. AI señaló la solicitud formulada por Granada durante su primer EPU, de apoyo técnico y financiero de las Naciones Unidas, entre otras cosas para poder extender una invitación abierta y permanente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos<sup>15</sup>.

## **C. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario aplicable**

### **1. Igualdad y no discriminación**

11. La JS1 indicó que en Granada persistían estigma y discriminación considerables contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, así como un fuerte rechazo público contra los movimientos a favor de la igualdad. Este importante estigma se mantenía en parte debido a las expresiones públicas contra la homosexualidad formuladas por los dirigentes religiosos<sup>16</sup>. La JS1 recomendó que Granada impartiera formación en materia de atención de la salud a agentes de policía y trabajadores y que adoptara todas las medidas necesarias, como legislación, formación y políticas, entre otras, para eliminar dicha discriminación tanto del ámbito público como del privado<sup>17</sup>.

12. La CHRI indicó que en Granada no existía legislación específica contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Recomendó que Granada promoviera y facilitara el diálogo constructivo en materia de orientación sexual e identidad de género con los interesados, incluidos los ministerios públicos, la sociedad civil y los dirigentes religiosos. Recomendó asimismo que Granada instituyera políticas destinadas a poner fin a la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género<sup>18</sup>.

13. AI instó a Granada a que impartiera educación en materia de derechos humanos y formulara programas de concienciación contra la discriminación en colaboración con las organizaciones de derechos humanos locales que trabajaban a favor de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales<sup>19</sup>.

### **2. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona**

14. Refiriéndose a las recomendaciones rechazadas por Granada durante su primer examen en el marco del EPU<sup>20</sup>, sobre la abolición de la pena de muerte y la adopción de una moratoria oficial de dicha pena, la JS2 indicó que, si bien no se habían llevado a cabo ejecuciones durante varios decenios, el hecho de que Granada hubiera mantenido la pena de muerte dejaba abierta la posibilidad de que se restablecieran las ejecuciones. No existía una moratoria oficial de las ejecuciones y el Gobierno se había opuesto expresamente a todo

intento internacional de abolir la pena de muerte. El método de ejecución por ahorcamiento de Granada había sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo consideraba inhumano y degradante. La JS2 recomendó que Granada aboliera la pena de muerte o declarara una moratoria oficial de dicha pena; se abstuviera de intentar el restablecimiento de la pena de muerte; adoptara las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las más altas garantías procesales y velara por que las leyes nacionales se ajustaran al nivel más estricto de examen aplicable a los casos relativos a la pena de muerte. Recomendó además que Granada garantizara el pleno cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concretamente las decisiones que afectaban a casos individuales y a medidas cautelares relativas a la pena de muerte<sup>21</sup>. La CHRI también recomendó que Granada aboliera oficialmente la pena de muerte<sup>22</sup>.

15. AI instó a Granada a que declarara una moratoria oficial de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte, conforme a lo dispuesto en cuatro resoluciones aprobadas por la Asamblea General desde diciembre de 2007, de las cuales la más reciente era la resolución 67/176 de 20 de diciembre de 2012. Además, exhortó a Granada a que apoyara los llamamientos a la abolición de la pena de muerte, tanto a nivel nacional como internacional, entre otras cosas votando a favor de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre una moratoria del uso de la pena de muerte<sup>23</sup>.

16. La Iniciativa Global para Acabar con Todo Castigo Corporal hacia Niños y Niñas (GIEACPC) señaló que en Granada el castigo corporal de niños y niñas seguía siendo legítimo, a pesar de las reiteradas recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos y las recomendaciones formuladas durante el primer ciclo del EPU<sup>24</sup>.

17. La CHRI observó que durante el primer EPU, Granada rechazó las recomendaciones relativas a la eliminación del castigo corporal de niños y niñas y a la prohibición del uso del castigo corporal en el hogar o en las instalaciones educativas. Sin embargo, el país afirmó su compromiso de alentar su no utilización<sup>25</sup>.

18. La GIEACPC observó que el Código Penal permitía el uso de la fuerza en el hogar, en el marco de la "autoridad para corregir la mala conducta de un niño, un sirviente o una persona similar". El artículo 65 afirmaba que los padres y otras autoridades con patria potestad podían utilizar la fuerza sobre niños y niñas menores de 16 años "a los efectos de corregir" y "por mal comportamiento o desobediencia de órdenes lícitas". La "autoridad para corregir" puede delegarse en otros, y está implícita en el caso de los docentes. Observó además que la Ley contra la Violencia Doméstica de 2010 definía la violencia doméstica como "todo comportamiento dominante o abusivo nocivo para la salud, la seguridad o el bienestar de una persona o un niño", aunque esto no se interpretaba como la prohibición de todo castigo violento en la crianza de los hijos. Ni la Ley de Protección de la Infancia de 1998 ni la Ley de la Infancia (Protección y Adopción) de 2010 contenían una prohibición del castigo corporal<sup>26</sup>.

19. La GIEACPC indicó que el Código Penal disponía el "uso justificado de la fuerza" por los maestros a los efectos de "la corrección" (artículos 54, 55 y 56). La Ley de Educación de 2002 autorizaba el uso del castigo corporal y penalizaba su aplicación si se infringían las disposiciones de la ley (art. 53)<sup>27</sup>.

20. La GIEACPC hizo votos por que los Estados formularan recomendaciones concretas para que la Ley de Justicia Juvenil de 2012, que prohibiría los castigos corporales en el sistema penal, entrara en vigor y se redactara y promulgara legislación que prohibiera el castigo corporal de niños y niñas en todos los ámbitos, con carácter prioritario<sup>28</sup>.

### 3. Derecho a la intimidad

21. La CHRI observó que durante el último EPU, Granada había afirmado su compromiso con aumentar la conciencia acerca de los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, y con alentar la tolerancia. La CHRI observó que las relaciones sexuales adultas consensuadas entre hombres seguían siendo un delito penal. Sin embargo, señaló que la legislación no incluía disposiciones relativas a las actividades sexuales entre mujeres. La CHRI y la JS1 recomendaron que Granada adoptara medidas para la derogación del artículo pertinente del Código Penal<sup>29</sup>.

22. AI observó que, aunque en su primer EPU Granada se había comprometido a seguir despertando la conciencia acerca de la cuestión y a alentar la tolerancia, según algunos grupos locales que trabajaban a favor de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, desde el último examen no se habían realizado campañas de concienciación pública<sup>30</sup>. AI también instó a que Granada derogara todas las leyes que prohibían y castigaban las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo género, incluidas las disposiciones contenidas en el Código Penal<sup>31</sup>.

### 4. Libertad de expresión

23. La CHRI recomendó que Granada velara por que un órgano imparcial e independiente investigara con diligencia todas las denuncias de injerencias gubernamentales en la labor de los medios de comunicación y que se aprobara una Ley de Derecho a la Información que se ajustara a las mejores prácticas internacionales<sup>32</sup>.

### 5. Derecho a la salud

24. La JS1 indicó que el Código Penal de Granada también obstaculizaba las iniciativas de salud pública en relación con la lucha contra el VIH/SIDA<sup>33</sup>. La JS1 recomendó que Granada garantizara que los servicios de atención de la salud adoptaran políticas a este respecto, y que aplicara medidas para sancionar a las personas que no cumplieren las reglamentaciones<sup>34</sup>.

#### Notas

<sup>1</sup> The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original submissions are available at: [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org).

#### *Civil society*

#### *Individual submissions:*

AI	Amnesty International, London (UK);
GIEACPC	Global Initiative to End Corporal Punishment of Children, London (UK);
CHRI	Commonwealth Human Rights Initiative, New Delhi (India);

#### *Joint submissions:*

JS1	Joint submission 1 submitted by: GRECHAP, Gorundation Grenada and the Sexual Rights Initiative;
JS2	Joint submission 2 submitted by: The Greater Caribbean for Life, The Caribbean Institute for Human Rights and The International Human Rights Clinic of the Inter-American University of Puerto Rico, School of Law.

<sup>2</sup> The following abbreviations have been used in the present document:

ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 2	Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty
CAT	Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
CRPD	Convention on the Rights of Persons with Disabilities
ICPPED	International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

- <sup>3</sup> A/HRC/15/12, paragraphs 71.1 - 12 (See text of recommendations below):
- 71.1. Consider ratifying other human rights core instruments, namely, the Convention against Torture, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (**Algeria**);
- 71.2. Consider ratifying the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, as well as the Optional Protocols thereto; the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance; the First and Second Optional Protocols to the International Covenant on Civil and Political Rights; the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and to the Convention on the Rights of the Child; and the Rome Statute; accede to the Conventions on refugees and stateless persons; and accomplish the human rights goals set out in Human Rights Council resolution 9/12 (**Brazil**);
- 71.3. Ratify pending core international human rights instruments, notably the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and the International Convention on the of the International Criminal Court, including accession to the Agreement on Privileges and Immunities (**Slovakia**);
- 71.4. Ratify the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the Optional Protocol thereto; ratify the First and Second Optional Protocols to the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (**Chile**);
- 71.5. Intensify efforts to cooperate with the international human rights system by signing and ratifying the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; the Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights; the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the Optional Protocol thereto; the two Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child; and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol thereto; and ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (**Spain**);
- 71.6. Sign and ratify the following international instruments: the Optional Protocols to the International Covenant on Civil and Political Rights; the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; the Convention against Torture and the Optional Protocol hereto; the Optional Protocols of the Convention on the Rights of the Child; the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol thereto; and the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (**Argentina**);
- 71.7. Sign, ratify or accede to the main international human rights instruments, in particular the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, the Optional Protocol to the International Covenant on Economic and Social Rights, and the Rome Statute (**Uruguay**);
- 71.8. Consider signing all core outstanding international human rights instruments and enacting the domestic legislation necessary to domesticate the provisions of these instruments (**South Africa**);
- 71.9. Ratify, as soon as possible, the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (**France**);
- 71.10. Accede to the Rome Statute of the International Criminal Court (**Netherlands**);
- 71.11. In line with the Government's commitment to the rights of persons with disabilities, adhere to the principles set out in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and favourably consider its ratification as soon as possible (**Mexico**);
- 71.12. Consider actively acceding to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (**China**).
- <sup>4</sup> Amnesty International, page 1. See also A/HRC/15/60, paragraph, 505.
- <sup>5</sup> Joint submission 2 submitted by The Greater Caribbean for Life, The Caribbean Institute for Human Rights and The International Human Rights Clinic of the Inter-American University of Puerto Rico, School of Law, page 5. See Submission for case cited.
- <sup>6</sup> Joint submission 2 submitted by The Greater Caribbean for Life, The Caribbean Institute for Human Rights and The International Human Rights Clinic of the Inter-American University of Puerto Rico, School of Law, page 5; Commonwealth Human Rights Initiative, para. 2 and Amnesty International page 3.

- 7 Amnesty International, page 3.
- 8 Amnesty International, page 3.
- 9 Amnesty International, page 3.
- 10 Joint Submission 1 submitted by GrenCHAP, Gorundation Grenada and the Sexual Rights Initiative, page 5.
- 11 Amnesty International, page 3.
- 12 Amnesty International, page 3.
- 13 Commonwealth Human Rights Initiative, page 2.
- 14 Commonwealth Human Rights Initiative, page 2.
- 15 Amnesty International, page 1. See also A/HRC/15/60, paragraphs, 504 and 505.
- 16 Joint Submission 1 submitted by GrenCHAP, Gorundation Grenada and the Sexual Rights Initiative, paragraph 12. See submission for case cited.
- 17 Joint Submission 1 submitted by GrenCHAP, Gorundation Grenada and the Sexual Rights Initiative, page 5.
- 18 Commonwealth Human Rights Initiative, page. 4. See also Amnesty International, page 2.
- 19 Amnesty International, page 3.
- 20 A/HRC/15/12, paragraphs: 71.38-48 (See text of recommendations below):  
 71.38 Amend the relevant legislation with a view to abolishing capital punishment, in line with the General Assembly resolutions 62/149 and 63/108 and the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, and commute existing death sentences to terms of imprisonment (**Slovakia**);  
 71.39. Abolish the death penalty for all crimes, and sign and ratify the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (**Spain**);  
 71.40. Accede to the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aimed at abolishing the death penalty, and take the necessary steps to remove the death penalty from Grenada's justice system (**Australia**);  
 71.41. Adopt, as soon as possible, a de jure moratorium on the death penalty with a view to its definitive abolition, and accede to the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, which prohibits the death penalty in all circumstances (**France**);  
 71.42. Establish a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty (**Brazil**);  
 71.43. In the light of the moratorium on the application of the death penalty, take appropriate measures with a view to its abolition (**Uruguay**);  
 71.44. Consider formally abolishing the death penalty (**Slovenia**);  
 71.45. Formally abolish the death penalty (**Germany**);  
 71.46. Abolish the death penalty (**United Kingdom**);  
 71.47. Definitively abolish the death penalty in its domestic legislation (**Argentina**);  
 71.48. Abolish the death penalty completely and, in the meantime, establish a formal moratorium on executions, as urged by the respective General Assembly resolutions (**Hungary**).
- 21 Joint submission 2 submitted by The Greater Caribbean for Life, The Caribbean Institute for Human Rights and The International Human Rights Clinic of the Inter-American University of Puerto Rico, School of Law, page 5. See submission for case cited. See also submission from the Commonwealth Human Rights Initiative, paras 5-7.
- 22 Commonwealth Human Rights Initiative, para. 2.
- 23 Amnesty International, page 3.
- 24 Global Initiative to End Corporal Punishment of Children, page 1. A/HRC/15/12, paragraphs 71.61-62 and 71.64 (See text of recommendations below):  
 71.61. Abolish provisions in its domestic legislation that authorize the corporal punishment of children in all places, in particular in detention facilities and in schools (**France**);  
 71.62. Adopt a law that prohibits corporal punishment against children in all areas of life (**Uruguay**);  
 71.64. Amend the Criminal Code to ensure equal protection of boys and girls from all forms of sexual abuse and exploitation as well as to eliminate corporal punishment provisions from existing laws and to prohibit the use of corporal punishment in places of detention and in schools (**Germany**).
- 25 Commonwealth Human Rights Initiative, page 4.
- 26 Global Initiative to End Corporal Punishment of Children, page 2.
- 27 Global Initiative to End Corporal Punishment of Children, page 3.
- 28 Global Initiative to End Corporal Punishment of Children, pages 1-2.

- <sup>29</sup> Commonwealth Human Rights Initiative, page 4. Joint Submission 1 submitted by GrenCHAP, Gorundation Grenada and the Sexual Rights Initiative, paragraph 14. See submission for case cited.
- <sup>30</sup> Amnesty International, page 2.
- <sup>31</sup> Amnesty International, page 3.
- <sup>32</sup> Commonwealth Human Rights Initiative, page 3. See submission for cases cited in para. 5.
- <sup>33</sup> Joint Submission 1 submitted by GrenCHAP, Gorundation Grenada and the Sexual Rights Initiative, paragraph 15.
- <sup>34</sup> Joint Submission 1 submitted by GrenCHAP, Gorundation Grenada and the Sexual Rights Initiative, page 5.
-